

## **EL PP Y EL MALENTENDIDO DE LA POLÍTICA LAICA**

Desde hace algunas semanas LA RAZÓN viene destacando el distanciamiento de la Iglesia Católica española con relación al Gobierno del Partido Popular. Las razones esgrimidas desde instancias católicas son graves y no hay indicios de que el Gobierno esté por el cambio de rumbo, al menos por ahora.

En este conflicto ha venido a terciar, en estas mismas páginas, el antiguo Portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Rodríguez, quien el pasado 27 de Diciembre y en su habitual columna *Desde alo.com* publicaba un comentario, aparentemente ligero, con el expresivo título de "Cálmese la Iglesia que Aznar tiene mal genio".

Al Sr. Rodríguez en absoluto puede en estos momentos atribuirsele ninguna representación oficial del punto de vista del Gobierno de Aznar. Pero no creo equivocarme mucho si afirmo que en su breve artículo aflora una visión pretendidamente laica de la política que coincide, casi al pie de la letra, con la práxis que él y sus correligionarios impusieron, como ley de plomo, en el Partido Popular del llamado "centro reformista" y que está en la base de los reproches que, desde cada vez más amplios e importantes sectores católicos, se hace a determinadas políticas del Gobierno popular. El texto, en este sentido, tiene más importancia de la que parece.

El planteamiento de fondo vendría a ser, en esencia, el siguiente: la política es, ante todo, el arte de mantenerse en el poder, para lo cual lo prioritario es asegurarse el apoyo del mayor número de votos posibles. La finalidad de la política es la gestión eficiente del bienestar público, cuyo contenido es básicamente económico, y el aseguramiento del necesario juego democrático. Cualquier pretensión de darle un contenido ético de fondo, de incorporar un juicio sobre el hombre y la sociedad, equivaldría a hacer "política religiosa" o poco menos que a restaurar la confesionalidad católica del Estado franquista, a teocracia, a imposición de la política de creencias religiosas que corresponden al ámbito íntimo de las conciencias, a intromisión de los Obispos en la vida política.

Para encontrar los orígenes de este malentendido probablemente habría que bucear en el complejo y ambivalente proceso de la Transición y, si se me apura, en lo que Ratzinger llama "el choque del posconcilio". Pero, en todo caso, los efectos están ahí: el Gobierno y sus políticas quieren ser, en muchos casos, instancias neutrales, asépticas, ante cuestiones que, además de ser sostenidas por la Iglesia, son de puro derecho natural. Tales son el obligado respeto a la vida y a la dignidad de la persona desde la concepción, en contra del aborto -quirúrgico o farmacológico- o la experimentación con embriones humanos, la necesidad de protección de la familia, amenazada por su equiparación con las llamadas parejas de hecho y por la ausencia de políticas públicas para su protección positiva, o la defensa de la efectiva

libertad de los padres para escoger la educación de sus hijos o su derecho a que la escuela sea también un agente transmisor de la fe que da sentido a sus vidas y que quieren para sus hijos.

Pero lejos de conseguir la neutralidad -que en política es imposible-, lo que hace el Partido Popular con esta actitud es consolidar el actual *statu quo* en los aspectos que llamaríamos "culturales" en sentido amplio. Un estado de cosas que, no lo perdamos de vista, es, en gran medida, el fruto de un ambicioso proyecto del PSOE, no precisamente neutro, para cambiar la sociedad española hasta que no la conociese "ni la madre que la parió", según la profética frase de Alfonso Guerra. Y esto en el mejor de los casos. En otros, el atávico complejo cultural de la derecha española o el mimetismo que se deriva de su ausencia de un modelo propio de hombre y de sociedad, llevan al PP a alinearse, más o menos proactivamente, con los propósitos de la izquierda laicista, en ciertos aspectos auténtico ariete de la "cultura de la muerte" entre nosotros.

Este enfoque falsamente laico de la política, pasada la indulgencia a un Gobierno cuya falta de mayoría absoluta obligaba en su primera legislatura al pactismo, causa cada vez más estupor a una gran parte del electorado del Partido Popular, de amplia mayoría católica al decir de los sociólogos. Pero no sólo del electorado. Causa perplejidad también, a juzgar por lo que nuestra actividad asociativa nos ha permitido muchas veces oír en privado, a un significativo número de cargos públicos del PP, cuya conciencia cristiana no puede dejarles tranquilos con su disciplinado acatamiento del monolítico nuevo orden dictado por esos que han sido llamados "los fontaneros de la gloria" del Gabinete de Aznar en Moncloa.

La situación ha llegado a un punto en que los católicos, con nuestros Obispos a la cabeza, no podemos callar. Y para un partido que, si hemos de hacer caso a lo que proclama el primer artículo de sus Estatutos, no ha renunciado a actuar "dentro de la filosofía del humanismo cristiano" y cuyos dirigentes son, en su inmensa mayoría, católicos practicantes, el camino de la rectificación debe venir por la recuperación de dos ideas básicas que Juan Pablo II recordaba recientemente, con ocasión del Jubileo de los Políticos, ante cinco mil parlamentarios y gobernantes de noventa y dos países: primera, la política es el uso del poder legítimo para la consecución del bien común de la sociedad; y, segunda, el núcleo de la vocación del político es el servicio a los demás. Bien común que comprende no sólo el bienestar material, sino también el conjunto de condiciones, incluidas las morales y religiosas, que permiten al hombre y a las familias lograr su perfección. Y servicio a los demás que es preocupación por la persona integral y no sólo por el hombre económico y consumidor. Aunque a Miguel Ángel Rodríguez, lamentablemente, pueda sonarle a Misa.

Jaime Urcelay  
Presidente de Profesionales por la Ética